



chiapas, otoño 1998

CHIAPAS: EL DIÁLOGO ENTRE EL EZLN Y LA SOCIEDAD CIVIL*

Dr. David Velasco Yáñez, SJ**

Agosto Tiene gran éxito la Consulta Nacional organizada por el PRD para denunciar *los ilícitos* del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), pues participan de 3.5 millones de personas, no obstante la campaña en contra emprendida por las Secretarías de Hacienda y de Gobernación, y la Asociación Mexicana de Banqueros, quienes a través de spots de televisión y radio subrayan una y otra vez que se trata de proteger a los ahorradores. Lo que silencian es que se trata de rescatar a los banqueros y de cargar sobre las espaldas de los contribuyentes y no contribuyentes el pago de esas deudas. El EZLN hace un llamado a no perder de vista la situación de las comunidades indígenas y, en particular, la situación de guerra que se vive en Chiapas, en medio del silencio, ya no de los

*Artículo redactado el 6 de noviembre de 1998.

** Dr. en Educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en coordinación con el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, de Santiago, Chile.

Nota: Las cifras entre paréntesis indican la fecha del diario LA JORNADA.

zapatistas ahora, sino de los medios de comunicación que dan más atención y cobertura al debate, no menos importante, del Fobaproa, al que el Subcomandante Marcos llama "crimen político-económico" (28.08.98). Aquí ocurre algo interesante: la formación de un bloque de diputados del PAN, PRI y PRD, en contra de un bloque de diputados del PAN y del PRI que sí apoya la iniciativa de la Secretaría de Hacienda y deja para después la investigación de ilícitos. El llamado de los zapatistas se centra en la propuesta de *ciudadanizar la política*, y encierra un "no me olvides", el llamado a luchar por los derechos de todos: "por la salud, la vivienda, la alimentación, el trabajo justamente pagado, la tierra, la educación, la cultura y la información, la libertad, la independencia, la democracia y la paz".

Otro hecho relevante de agosto, respecto a la guerra de Chiapas, es la resolución L.18, titulada DESARROLLO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, hecha por la Subcomisión de las Naciones Unidas para la prevención de la discriminación y protección a las minorías. Este organismo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pide al gobierno mexicano que "dé alta prioridad a la lucha contra la impunidad de los autores de violaciones graves de derechos humanos, (en particular) a los miembros de las poblaciones autóctonas"; y hace un "llamado a las partes signatarias de los acuerdos de San Andrés, a reasumir el proceso que favorezca el diálogo" (21.08.98). Por cierto, varios de los expertos "fueron contactados por miembros de la delegación diplomática mexicana a fin de ser convencidos de que los eventos en Chiapas son de carácter local y de ninguna manera se trata de una situación generalizada" (IBID). El senador priísta por Aguascalientes, Oscar López Velarde, señaló que el organismo de la ONU "no tiene por qué recomendar la reanudación de negociaciones entre el gobierno y el EZLN y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés; eso sería intervenir en un conflicto interno de México" (23.08.98). Con ocasión del cumplimiento de los ocho meses de la matanza de Acteal, se realizaron varios eventos entre los que destaca la lectura de una carta de un asistente de Koffi Annan,

Secretario General de la ONU, en la que se indica que está al pendiente del desarrollo de las investigaciones en torno a esa masacre.

Septiembre Parte con un hecho sumamente comentado: el silencio del presidente Zedillo, en su IV Informe de Gobierno, ante los dos grandes problemas nacionales, la guerra de Chiapas y el Fobaproa, que marcan las heridas más profundas de los mexicanos. Frente a este silencio se hacen oír las voces de personalidades y representantes de la sociedad civil convocando al EZLN a un diálogo para “analizar propuestas y llegar a acuerdos en torno a la realización de la consulta nacional sobre la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas y, además, para un intercambio de juicios, puntos de vista y alternativas posibles de solución al conflicto”. Justifican la convocatoria al diálogo con el hecho de que han sido diversas organizaciones de la sociedad civil de donde provienen diversas alternativas para la paz; y agregan que, “sin embargo, y de manera sorpresiva, el desgaste natural y el inducido no han sido suficientes para aquietar o eliminar la búsqueda de la paz digna y el apoyo a las reivindicaciones indígenas, a su exigencia de derechos humanos, al deseo mayoritario de que Acteal, la matanza y el proceso dilatorio no se repitan”. Aclaran que no pretenden erigirse en un “puente entre los zapatistas y el gobierno”, sino más bien, señalan, “creemos que una alternativa a la cerrazón que hoy se vive es el inicio de un diálogo con el EZLN, y nos gustaría que ese diálogo fuese con nosotros, porque nos interesa de modo muy vivo”. La fuerza de esta convocatoria reside en la autoridad intelectual y moral de sus convocantes. Además, firman 68 diputados, presidentes municipales de diversas partes de la República, cientos de redes de organizaciones civiles, sindicatos, organismos defensores de derechos humanos: la mayoría representantes de la sociedad civil a nivel nacional, y diversas organizaciones campesinas. También convocan FZLN, FAT, UPREZ, Asamblea de Barrios, Frente Popular Francisco Villa, Alianza Cívica, CAI, MCD y Asamblea Nacional por la Paz, entre otros” (04.09.98). Este contraste entre el silencio presi-

dencial y la convocatoria de personalidades y organizaciones de la sociedad civil para dialogar con los zapatistas se desarrolla en medio de otra contradicción de tipo político, entre, por una parte, los partidos políticos, principalmente el PAN y el PRD y, por el otro, el equipo político del gabinete presidencial. El motivo es un llamado "pacto de gobernabilidad" que garantice el proceso electoral del año 2,000. Muchos analistas y políticos interpretan el mensaje fundamental del IV Informe Presidencial, como el inicio formal de la sucesión presidencial del año 2000.

La tormenta del Fobaproa continúa, y cambia ligeramente de nombre: ya no se trata de convertir los pasivos a deuda pública, sino que se agrega un rubro más al presupuesto federal en una cantidad de 35 mil millones de pesos anuales. Esto es, lo que no se gasta en educación, salud y alimentación de la mayoría de la gente, pasa a cubrir los pasivos de los manejos ilegales de grandes banqueros, empresarios y políticos de alto nivel. Los partidos de oposición tuvieron un importante acercamiento en sus propuestas en torno al rescate bancario y el programa de apoyo a deudores. Sin embargo tanto la Secretaría de Hacienda como de la Secretaría de Gobernación, desplazaron el debate a dos instancias que no propiamente corresponden a los legisladores, una el llamado Grupo de Alto Nivel, integrado por los coordinadores parlamentarios y el Secretario de Gobernación y la otra, una Mesa Técnico Financiera, en la que se discuten aspectos más especializados en torno a las alternativas que se discuten para el rescate financiero.

No han faltado voces que señalan este desplazamiento como una maniobra del Ejecutivo ante otro Poder del Estado, la Cámara de Diputados, en que no controla la mayoría. El problema estriba en que hay diputados priístas que no están dispuestos a aprobar, sin más, la iniciativa que ha sido modificada por el gobierno federal. Esta indisciplina partidista es parte de la justificación para centrar en las dos instancias mencionadas el debate en torno a la fórmula que se pretende aprobar en torno al Fobaproa. De aquí se sigue una posición

política que ha sido muy cuestionada y que, sin embargo, tiene su valor político. Se trata de la renuncia del PRD a las dos instancias de negociación, argumentando, principalmente, que sus propuestas no han sido tomadas en cuenta. Esta posición perredista se hace incluso asumiendo las diferencias internas y la posición definida en el Consejo Político Nacional que prohibió a sus diputados federales seguir dialogando con otros partidos políticos. Este contexto es importante, porque, entre otras razones, al mismo tiempo se van registrando los efectos de la crisis financiera internacional que provoca una devaluación del peso frente al dólar, una alza de las tasas de interés, una contradictoria *comparecencia* de Gurría en la Cámara de Diputados, en la que defiende el modelo neoliberal aun en contra de las críticas que hacen funcionarios del FMI y del BM. Esto es, cuando en los organismos internacionales se pone a revisión el modelo neoliberal, no sólo para hacer pequeños ajustes, sino para transformarlo y darle su papel al Estado como regulador de la economía, sólo en México se hace la defensa a ultranza del modelo.

A los vendavales del Fobaproa, de la crisis financiera internacional y demás tormentas económicas, y también políticas, con el desplazamiento del pleno de la Cámara, vienen a caer sobre el ya sufrido estado de Chiapas fuertes tormentas que inundan y destruyen viviendas y poblaciones de la zona de la costa del Pacífico. Llegó mucha ayuda solidaria, que, en vísperas de elecciones locales, fue utilizada, buena parte de ella, por el gobierno del Estado y diversos grupos priístas: la entregarían a cambio de un compromiso de voto. Los zapatistas denuncian que "el gobierno del estado de Chiapas, con la complicidad de empleados federales, está perpetrando un robo escandaloso con la ayuda humanitaria que está destinada a los damnificados por las inundaciones, remedando al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, quien lucró con la ayuda enviada a las víctimas del terremoto en Managua. El señor Albores Guillén está convirtiendo el dolor y la sangre de decenas de miles de chiapanecos en un lucrativo negocio personal" (14.09.98). En otro comunicado, hace su denuncia

más fuerte: "El partido político que usted dice dirigir está llevando a cabo, en tierras chiapanecas, uno de los crímenes más indignantes de los últimos tiempos. Parecían difíciles de igualar la cobardía, la saña y la alevosía con los que su organización (bajo las órdenes del gobierno federal) perpetró la matanza de Acteal en diciembre de 1997, pero en estos días su partido político en Chiapas, encabezado por Roberto Albores Guillén, está haciendo todo lo posible por lograrlo. Como usted sabrá, seguramente de primera mano, la dirigencia del PRI chiapaneco y el gobierno del Estado están robando la ayuda humanitaria destinada a los damnificados de las zonas Sierra y Costa de Chiapas y lo poco que hacen llegar a los pobladores se les entrega si y sólo si pertenecen al PRI o si comprometen su voto en las próximas elecciones locales. La ancestral corrupción del priísmo chiapaneco es ahora un crimen de lesa humanidad, porque una cosa es que Albores y banda se gasten el dinero del *gasto social* federal en licores y francachelas, y otra muy distinta es que se apropien de la ayuda humanitaria en un caso de desastre, o que usen su distribución para comprar votos". Esta denuncia zapatista mereció respuesta del presidente Zedillo, no dirigida a ellos, sino a los priístas para evitar que siguieran entregando ayuda humanitaria condicionada al voto por el PRI.

Hacia fines de septiembre, cuatro acontecimientos relevantes: En el *Índice sobre la Percepción de Corrupción de 1998*, reporte de *Transparency International*, nuestro país obtiene una calificación de 3.3 en una escala del 1 al 10, que lo sitúa en niveles de corrupción semejantes a los de Filipinas y Senegal (23.09.98). Lo más preocupante es que esta corrupción va aparejada con la impunidad. El PRD reafirma su salida de las mesas de negociación, en particular de la mesa técnico-financiera, ya no sólo por que sus propuestas no han sido tomadas en cuenta, sino por el resultado de la Consulta Nacional que, en un 95 % rechazó la propuesta del gobierno; además, plantea también el 'pacto de gobernabilidad' para garantizar el proceso electoral del año 2000. Las declaraciones de Emilio Rabasa, Coordinador para el diálogo, indican que el equipo político del

gobierno no se ha dado cuenta de que quedó desplazado como interlocutor, y que los zapatistas se plantean diversos caminos para la paz, en diálogo con la sociedad civil (24.09.98). Un informe de la *Corte Interamericana de Derechos Humanos* revela que persisten en México la tortura y las desapariciones.

Octubre Entre varios acontecimientos y foros realizados con motivo del 2 de Octubre (“no se olvida”) destaca el comunicado del Subcomandante Marcos, que extractamos: “68 es una ventana para ver y aprender de la abierta confrontación entre varias formas de hacer política, entre distintas maneras de ser humanos. Allá arriba, el México de los poderosos, de los que deciden con la fuerza y por la fuerza el rumbo que más convenga a sus propios intereses, de los que hacen del monólogo, el garrote y la mentira la forma de gobierno, de los que no escuchan más que la voz que les devuelve el falso espejo que el Poder construye para quienes lo sirven e idolatran, de los que ofrecen la mano tendida y el diálogo directo mientras golpean, persiguen, encarcelan, violan, asesinan y mienten a quienes no les rinden obediencia ciega, sumisión, cabezas gachas. El México de los criminales que ordenan y que jalan el gatillo en Tlatelolco, en Acteal, en Chavajeval, en Unión Progreso, en Aguas Blancas, en El Charco. El México de los de arriba. El México que agoniza. Abajo, el México de 68. El México de los que viven y mueren en la rebeldía y la lucha por la justicia de la única forma posible, es decir, de vida entera. El México de los que siguieron, y siguen, exigiendo, luchando, organizando, resistiendo. El México de los que no cortaron su dignidad ni alargaron la desmemoria ... El México de los que lucharon y luchan por ser mejores de la única forma en que es posible ser mejores, es decir, con todos... a ellos y ellas, a los de siempre, saludamos nosotros los zapatistas” (3.10.98). Mientras tanto, las elecciones locales en Chiapas pasan casi desapercibidas, con todo y que se hacen denuncias y demandas de que se pospongan por no haber condiciones, tanto por la excesiva militarización del Estado, como por los daños causados por las tormentas. Los zapatistas envían otro comunicado en el que ratifican las

denuncias del uso electorero de la ayuda humanitaria, y anuncian que no interferirán en la realización de las elecciones.

El gobierno federal acepta que México se someta a la jurisdicción de la *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, instancia que depende de la OEA, Corte que cita al gobierno mexicano para que acuda a una audiencia "en relación con los casos del ejido Morelia, la masacre de Aguas Blancas y el encarcelamiento del general José Francisco Gallardo". El gobierno se rehusa, con el argumento de que ya cumplió con la CIDH (20.10.98). Este es el inicio de una serie de declaraciones, denuncias y críticas de diversos organismos internacionales de Derechos Humanos en contra del gobierno mexicano. Se añade un resolutivo de varios legisladores de los Estados Unidos, en que afirman que *el sentir del Congreso* es que la secretaria de Estado, Madeleine Albright, asegure que el equipo otorgado por Estados Unidos a las fuerzas de seguridad mexicanas no contribuya a la violación de los derechos humanos. También elogia al gobierno de México por haber extendido una invitación a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU para visitar el país. Y se instruye a la secretaria de Estado a "instar al gobierno de México a reducir las tensiones políticas y la violencia en el estado de Chiapas, al desarmar a grupos paramilitares y reducir su presencia militar ahí". Además, pide al gobierno mexicano y al EZLN que establezcan las condiciones necesarias para que se den negociaciones de buena fe y abordar las causas socioeconómicas y políticas del conflicto" (5.10.98).

En cuanto a organismos defensores de los Derechos Humanos, destaca la visita que hiciera a México Pierre Sané, secretario general de *Amnistía Internacional*. Hizo denuncias sobre el estado deplorable que guardan los derechos humanos en México, en especial en el sureste (10.10.98). En la misma línea, se pronunció la Confederación de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL), con todo y que se quitó la palabra *desmilitarización* a la resolución final de su reunión en Buenos Aires (12.10.98). *Humans Right Watch* denuncia la política de

la Secretaría de Relaciones Exteriores por *desdeñar* las observaciones y críticas de la CIDH y AI (14.10.98). A nivel nacional, es relevante la acusación que hace el Centro Miguel Agustín Pro ante la OEA sobre el aumento de la represión en el país durante 1998 (14.10.98). Pierre Sané declara en Tijuana que la situación de los derechos humanos en México había pasado de un año de crisis a verdadera catástrofe, refiriéndose en particular a la situación de los estados de Chiapas y de Guerrero (20.10.98). Ciudadanos, escritores, intelectuales, investigadores y otros denuncian lo que viene ocurriendo en la zona de conflicto, en particular, las movilizaciones del ejército y el hostigamiento que realiza para dificultar el encuentro de la dirigencia zapatista con la COCOPA y con representantes de la sociedad civil. Dicen al presidente Zedillo: "...pensamos que el Poder Ejecutivo que usted encabeza no está interesado en lograr la paz. La sociedad civil, y nosotros como parte de ella, estamos sumamente preocupados por la guerra sucia, cobarde y desigual en contra de nuestros hermanos indígenas y estamos muy interesados en lograr la paz" (29.10.98).

En la misma carta, este numeroso grupo de ciudadanos pide al presidente Zedillo que, en su carácter de jefe supremo de las fuerzas armadas, ordene el retiro inmediato de todas las tropas que indebida e ilegalmente se encuentran haciendo operativos en La Realidad, para facilitar el encuentro entre el EZLN y la Cocopa; que Garantice la realización y el buen desarrollo del diálogo entre el EZLN y la sociedad civil en San Cristóbal de las Casas del 20 al 22 de noviembre, con apoyo en los artículos 1 $\frac{1}{4}$, 6, 9 y 11 de nuestra Carta Magna, para lo cual deberá tomar las medidas necesarias a fin de garantizar el estricto respeto a nuestras garantías de libre tránsito, de reunión y de libre manifestación de las ideas, toda vez que todas y cada una de ellas son derechos constitucionales y no facultades discrecionales; y que no permita que se obstaculicen los esfuerzos del EZLN y de la sociedad civil para lograr la paz" (29.10.98). La *Conferencia del Episcopado Mexicano* informa a Francois Xavier Nguyen Van Thuan, presidente del *Consejo Pontificio de Justicia y Paz*, sobre la situación de empobrecimiento a raíz

del modelo económico desarrollado en México, la violación sistemática de los derechos humanos y la creciente militarización en Chiapas. Esta denuncia llevaría la esperanza de que el Papa Juan Pablo II en su próxima visita a México tome una postura al respecto (17.10.98).

A nivel internacional: Afirma José Saramago, recientemente premiado con el Nobel de Literatura: "Chiapas no es una noticia en un periódico, ni la ración cotidiana de horror. Chiapas es un lugar de dignidad, un foco de rebelión en un mundo patéticamente adormecido. Debemos seguir viajando a Chiapas y hablando de Chiapas. Ellos nos lo piden. Dicen en un cartel que se encuentra a la salida del campo de refugiados de Polhó: 'Cuando el último os hayáis ido, ¿qué va a ser de nosotros?'... Ellos no saben que cuando se ha estado en Chiapas, ya no se sale jamás... Por eso hoy estamos todos en Chiapas" (10.10.98). Hasta el embajador de los Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, señala que los grandes problemas pendientes de México son Chiapas y el Fobaproa (29.10.98). Llega Billie Meyers, diputado español, acompañado de 12 observadores de derechos humanos de España (20.10.98). En su entrevista con el coordinador para el diálogo inexistente, Emilio Rabasa, hubo diferencias de opinión y de apreciación sobre lo que realmente ocurre en Chiapas. Punto de discusión fue el número de efectivos que el ejército federal tiene en Chiapas. La observación del grupo español comienza el 20 de octubre, pero desde finales de septiembre y, en particular el 17 de octubre ya se había denunciado el movimiento de tropas hacia los Altos y la Lacandona (17.10.98); por su parte, la COCOPA espera una comunicación oficial sobre estos movimientos (18.10.98), al mismo tiempo que busca un pronto encuentro con el EZLN (20 y 21.10.98).

Los zapatistas envían nuevos comunicados para reanudar el diálogo con la COCOPA y la sociedad civil. "Estamos apelando otra vez a quienes han sido fundamentales en este proceso, a esos hombres, mujeres, niños y ancianos que se hacen voluntad y acción colectiva bajo el nombre de *sociedad civil* .. sumamos

ahora el llamado al Congreso de la Unión, para que aporte a la paz y se una al esfuerzo por detener la guerra de exterminio que el Ejecutivo federal perpetra en el sureste indígena mexicano ... estamos tratando de retomar el puente con la comisión legislativa y retomararlo justo donde quedó. Por eso esta carta y este breve recuento de historias y retos pendientes, por eso este breve trazo de lo que puede ser camino de paz o nueva frustración. Ahora, como antes, nos esperan tiempos difíciles. El cálculo torpe del gobierno sobre el proceso electoral de 1997 arruinó el proceso de paz y el esfuerzo conciliador de la COCOPA. Las complicaciones en el escenario político se repiten y aumentan hoy" (18.10.98).

La COCOPA exige garantías para el eventual encuentro y el EZLN denuncia las provocaciones militares ante el diálogo (28.10.98). Se entiende así la gravedad de los actuales movimientos del ejército federal, puesto que el *Aguascalientes* de La Realidad está cercado por varias guarniciones. Antes era vigilado con sobrevuelos rasantes, ahora son convoyes que pasan dos veces al día (4.11.98). Estas movilizaciones militares ponen en peligro no sólo el encuentro con los legisladores, sino también con los representantes de la sociedad civil, encuentro ya fijado y programado para el 20, 21 y 22 de noviembre de 1998 en San Cristóbal de las Casas (18.10.98). Da la impresión de que el ejército federal quien trata de impedir esos encuentros. Tanto, que algunos miembros de la comisión legislativa dudan si acudir o no al encuentro programado el 6, 7 y 8 de noviembre. Marcos pregunta si no reaparece el fantasma de Chinameca del 10 de abril de 1919 o la trampa del 9 de febrero de 1995 (28.10.98). Al momento de terminar de redactar el presente artículo, la COCOPA toma el acuerdo de dejar en libertad a sus miembros para que asista el que quiera y pueda. Quienes claramente han dicho que no asistirán denuncian la falta de garantías para la realización del encuentro. En la práctica, sólo irán 6 de los 16 miembros (6.11.98).

Un grupo de políticos e intelectuales llaman al pueblo de México a luchar por la paz, para que la guerra y la muerte no

se prolonguen indefinidamente como en otros países hermanos; al gobierno federal le piden que haga retirar las fuerzas militares de la zona de conflicto, y que demuestre ante el país y el mundo su genuina voluntad de concertar un diálogo firme y duradero; al Congreso de la Unión le piden realizar acciones permanentes, comprometidas y profundas a favor de la paz y facilitar la actividad de sus representantes en la COCOPA; a ésta le piden mantener una posición clara a favor de los intereses de los chiapanecos y de toda la sociedad; y a los zapatistas, proseguir con las medidas anunciadas para realizar el diálogo lo más pronto posible (3.11.98).

Se siguen escuchando las voces internacionales en torno a la guerra de Chiapas. El *Foro de Sao Paulo*, que reúne a los partidos de izquierda de toda América Latina, se pronunció por una salida política al conflicto en Chiapas y en otras latitudes, como en Colombia. Lo mismo hizo el *Consejo Internacional de Paz*, en el que participan tres Nobel de la Paz -Oscar Arias, Desmond Tutu y el Dalai Lama- manifestó su profunda preocupación por la situación de deterioro en las comunidades indígenas de Chiapas” (4.11.98)

Los zapatistas se preguntan si la actitud del gobierno es de represalia, ya que ellos han optado por dialogar no con el gobierno sino con la sociedad civil, la COCOPA y el Congreso de la Unión; o la de impedir el diálogo para acusar luego de intransigentes a los zapatistas (28.10.98). Quizá va quedando claro que el gobierno busca la solución militar, para poder explotar los ricos yacimientos petroleros sin la molesta presencia de las comunidades indígenas.



Copyright of Xipe Totek is the property of Xipe Totek. The copyright in an individual article may be maintained by the author in certain cases. Content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.